

**FORMULARIO DE**

Código: ADIIN-PG-10-F001

Versión: 1

Fecha: 11-07-2016

Petición: CASO-DPE-1101-110101-212-2019-001275  
 Unidad: COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 7 LOJA

Admisibida: ADRIANA TORRES  
 Fecha de: 09-10-2019

Señoría:  
 Defensoría del Pueblo de Ecuador

**DATOS DEL PETICIONARIO**

Peticionario: RENATO AGUIRRE VALDIVIESO Cédula: 1102813514  
 Teléfono: E-mail:  
 Dirección: ERNESTO RODRIGUEZ WIT RIO XIO Ciudad: LOJA

**DATOS CONTRA QUIEN SE PRESENTA LA**

Me dirijo a usted con el fin de exponer lo siguiente:

SE INTERPONGO DE OFICIO LA PRESENTE ACCIÓN DE PROTECCIÓN, POR LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA EN CUANTO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD CON CRITERIOS DE EQUIDAD Y PARIDAD DE GÉNERO EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS PERSONAS, VULNERACIÓN DE LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL E INOBSERVANCIA DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD FORMAL, IGUALDAD MATERIAL Y NO DISCRIMINACIÓN, DE LAS CONCEJALAS VERÓNICA LUCIA MIÑO ORTIZ E IDELSA TATIANA BARBA MEDINA, EN SU CALIDAD DE MUJERES REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA DEL CANTÓN ZAPOTILLO EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA, A DESEMPEÑAR LA FUNCIÓN DE VICEALCALDESA DEL CANTÓN ZAPOTILLO, FUNCIÓN QUE LE PERMITIRÁ COMPARTIR EL PODER Y LA TOMA DE DECISIONES CON EL ING. OLIVER EFFRÉN VIDAL SARANGO, HOMBRE QUE FUE ELEGIDO PARA REPRESENTAR A LA CIUDADANÍA COMO ALCALDE DEL MISMO CANTÓN.

Petición concreta:

ACCIÓN DE PROTECCIÓN

**DERECHOS VULNERADOS**

Libertad: Art. 66.4 Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.

Participación: Art. 61.7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y la participación intergeneracional.

Protección: Art. 82. El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.

\_\_\_\_\_  
 Firma del

Instrucción	Superior	Grupo étnico:	MESTIZO/A
Estado civil:	CASADO	Sexo:	HOMBRE
Nacionalidad	ECUADOR		

Por favor llenar para estadísticas de la institución

-dos



## SEÑOR JUEZ MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN ZAPOTILLO

### I. LEGITIMACIÓN ACTIVA.-

**RENATO AGUIRRE VALDIVIESO**, en calidad de Coordinador General Defensorial Zonal 7, conforme lo acredita con los documentos habilitantes que adjunto, con cédula de ciudadanía N°1102813514 domiciliado en la ciudad de Loja; y, **Adriana Torres Ochoa**, Servidora Pública de la Defensoría del Pueblo ante su autoridad muy respetuosamente comparecemos para interponer de oficio la siguiente acción de protección, conforme a lo dispuesto en los arts. 86 número 1; art. 88; art. 215 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; art. 9 literal b) y art. 39 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Los nombres y apellidos de las personas afectadas son: **VERONICA LUCIA MIÑO ORTIZ**, con cédula de ciudadanía N°0704395409, de 37 años de edad, casada, domiciliada en Zapotillo Barrio Hermano Miguel S/N, concejala rural del cantón Zapotillo; y, **IDELSA TATIANA BARBA MEDINA**, con cédula de ciudadanía 0704883719, de 33 años de edad, casada, domiciliada en la Parroquia Paletillas calle Domingo Moran frente al Centro de Salud.

### II. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD U ÓRGANOS ACCIONADOS.

La presente acción de protección está dirigida en contra del Concejo Municipal del cantón Zapotillo, representado legalmente por el Ing. Oliver Efrén Vidal Sarango, Alcalde a quien se lo citará en la Palacio Municipal del Cantón Zapotillo ubicado en la calle 24 de mayo y Capitán Febres Cordero; y, con los señores concejales: Sr. Diego Enrique Barreto Panamito, Juan Leonel Correa Requena, Sr. Jorge Alberto Rogel Valdiviezo en calidad de concejales del cantón Puyango, provincia de Loja; Abg. Luis Padilla, en calidad de Procurador Síndico o quien ocupe dicho cargo actualmente

Además, por cuanto la presente acción se presenta en contra del Estado, conforme a las normas de la Ley Orgánica de la Procuraría General del Estado, solicito se notifique a la **Procuraduría General del Estado** a través de su Delegada Ana Cristina Vivanco Eguiguren en Loja, a quien se le notificará en sus oficinas ubicadas en la Calle 18 de noviembre entre José Antonio Eguiguren y Colón de la ciudad de Loja, conforme lo determinado en el Art. 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, recordando que el principal componente del Estado es el Pueblo.

### III. DESCRIPCIÓN DEL ACTO U OMISIÓN VIOLATORIA DE DERECHOS CONSTITUCIONALES.-

Conforme consta en el Acta de Sesión Inaugural del Concejo Municipal del Cantón Zapotillo, que se adjunta a la presente acción, el día 15 de mayo de 2019, se instala la sesión inaugural de constitución del Concejo Municipal de Zapotillo, bajo la presidencia del Ing. Oliver Efrén Vidal Sarango, Alcalde del cantón Zapotillo, con la asistencia de los siguientes señores

concejales y concejala: Sr. Diego Enrique Barreto Panamito, Juan Leonel Correa Requena, Jorge Alberto Rogel Valdiviezo, Idelsa Tatiana Barba Medina; y, Verónica Lucía Miño Ortiz.

En la referida sesión se declaró formalmente instalado y legalmente constituido el Concejo Municipal del Cantón Zapotillo para el periodo 2019 – 2023.

Conforme se desprende del Acta de Sesión, el cuarto punto que se trató en la misma fue la elección del/la Vicealcalde/sa del GAD Municipal de Zapotillo. Es así que se evidencia que a través de Secretaria se expresa que como cuarto punto tenemos elección de la Vicealcaldesa o del Vicealcalde del Cantón Zapotillo conforme a lo establecido en los artículos 57 literal o), 71 y 317 inciso segundo del (COOTAD) A continuación el concejal Jorge Rogel toma la palabra y en su parte pertinente manifiesta: "...que este proceso de elegir al Vicealcalde para mí, es importante antes de todo, respetar el criterio de mi gente, también el trabajo en equipo, el criterio del pueblo que me habían venido sugiriendo que busque una Vicealcaldía, yo les había dicho que lo más importante es trabajar en equipo, les había dicho que lo más importante, es la armonía, y que la búsqueda de ese trabajo en equipo hemos llegado a un acuerdo político, porque aquí tenemos que ser claros, aquí estamos hablando de política y estamos hablando también del futuro de nuestra cantón, los intereses personales se quedan a un lado, yo no he tenido ese interés personal, sino más bien mi interés general, yo lo que sirva para mi Cantón y estoy seguro que la decisión que hemos tomado el acuerdo hoy sí, y la decisión como Movimiento Político como Alianza Unidad Zapotillana, compañeros yo quiero mocionar al compañero Juan Correa para que ostente la Vicealcaldía, en base a los acuerdos políticos que tenemos, dentro de esta alianza...."

Luego toma la palabra el Alcalde y señala "estimados Concejales y Concejales ahí existe una moción solicito a ustedes si existe respaldo para la misma para procede."

En el mismo sentido, toma también la palabra la Concejala Verónica Miño, quien en su parte pertinente manifiesta: "...dejo sentado que me hubiera gustado que sea del sector Rural, ese hubiera sido mi deseo y mucho más que hubiera tenido un rostro femenino esta Vicealcaldía, me hubiera gustado que la ciudadanía y mis compañeros hubiesen pensado en una representatividad de una mujer de la Ruralidad, me hubiera gustado que se respete aquella paridad de género, que es necesario también para el bienestar de cada sector ( ) más sin embargo, acepto también ese criterio apoyo esa moción Alcalde..."

Acto seguido toma la palabra el concejal Diego Enrique Barreto Panamito, y mociona a la concejala Idelsa Barba para la dignidad de Vicealcaldesa, manifestando "por cuanto así como decíamos que debe ser el mayor votado, ella es la segunda más votada de la zona Rural y creo que también debe ser tomada en cuenta."

Luego de la votación y con cuatro votos por la moción de la candidatura del Ing. Juan Leonel Correa Requena y dos votos a favor de la Ing. Idelsa Tatiana Barba Medina, una vez conocidos los resultados toma la palabra el Alcalde quien manifiesta "...estimados concejales y concejalas una vez que, hemos escuchado los resultados obtenidos por el compañero Juan Correa quisiera, en este mismo punto de orden proceder a tomar juramento de posesión al Vicealcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo, para el periodo 2019-2023..."

#### IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

-3- Huen 1/8

1. **Vulneración del derecho a la seguridad jurídica en cuanto al principio de igualdad con criterios de equidad y paridad de género en la participación política de las personas**

El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, respecto a la seguridad jurídica, indica que:

Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes

Disposición que se refuerza con lo establecido en el artículo 11 de la Constitución del Ecuador, específicamente en sus numerales 3 y 4, que expresamente estipulan que:

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.

Al respecto de la seguridad jurídica, la Corte Constitucional del Ecuador ha expresado que:

La importancia del derecho a la seguridad jurídica radica entonces en dos aspectos fundamentales: El primer aspecto, es que el Estado, al hacer uso del poder con el que cuenta (cuando manifiesta su voluntad a través de un acto jurídico por medio de los distintos órganos que lo componen) debe contar con las garantías mínimas de certeza y confianza de que el propio Estado se somete a los diversos lineamientos que integran el ordenamiento jurídico, a través del cual se legitima su accionar. Estas garantías de certeza son el conjunto de condiciones, elementos, requisitos o circunstancias previas a las cuales debe sujetarse el Estado para generar una afectación válida a los intereses de los gobernados y al conjunto de sus derechos. El segundo aspecto es que la seguridad jurídica permite complementar y reforzar el ejercicio del derecho a la libertad, ya que el derecho a la seguridad jurídica supone la creación de un ámbito de certeza y confianza en las relaciones sociales, y en las relaciones de la sociedad civil con el Estado.<sup>1</sup> (Énfasis añadido).

En virtud de lo manifestado, el derecho a la seguridad jurídica se constituye en garantía para que los derechos sean respetados, puesto que una situación jurídica no será cambiada sino por los procedimientos establecidos previamente; he ahí su importancia en el contexto constitucional, la finalidad es mantener el orden jurídico, con la sujeción de todos los poderes del Estado a la Constitución y la Ley.<sup>2</sup> (Énfasis añadido).

1 Sentencia: N° 062-17-SEP-CC, del 8 de Marzo de 2017, Registro Oficial N° 7 Suplemento, 2 de Mayo de 2017.

2 Sentencia: N° 210-18-SEP-CC, del 13 de Junio de 2018, Registro Oficial N° 62 Suplemento, 19 de Octubre de 2018.

Es decir, que la seguridad jurídica implica la confianza de que el Estado, a través de los distintos órganos que lo componen, actuará conforme a lo establecido en la Constitución del Ecuador y la demás normativa que sea acorde a ella. Entonces, para que se haya vulnerado el derecho a la seguridad jurídica, es necesario que lo que se reclame, demande o exija, se encuentre previamente establecido en la normativa vigente.

En el caso que nos ocupa esto es así, respecto a la paridad de género el artículo 61.7 de la Constitución de la República del Ecuador indica que:

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativa, pluralista y democrática, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional.

Es así que la Constitución de la República del Ecuador establece como un derecho de las y los ecuatorianos el desempeñar empleos y funciones públicas, mediante sistemas de selección y designación que garanticen la participación con criterios de equidad y paridad de género. Este derecho se complementa con el artículo 65 de la Constitución de la República del Ecuador, mismo que indica que:

*Art. 65.- El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas a las elecciones pluripersonales se respetará su participación alternada y secuencial.*

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados.

Siendo así que la paridad de género es concebida también como un principio sobre el cual debe tomarse las decisiones de nominación o designación, que es el caso que nos ocupa, en la función pública, aplicable en todos los niveles de gobierno, nacional o descentralizado; al ser la Constitución la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico y sobre la cual deberán realizarse todas las normas y actos del poder público, conforme se desarrollará en el punto número 2.

Pero además de la norma constitucional, es el mismo Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el que en el inciso segundo de su artículo 317, indica que:

Los consejos regionales, concejos metropolitanos y municipales procederán a elegir de entre sus miembros a la segunda autoridad del ejecutivo del correspondiente gobierno, de acuerdo con el principio de paridad entre mujeres y hombres en donde fuere posible (...)

En el caso del Concejo Municipal de Zapotillo, este compartir del poder, toma de decisiones y funciones públicas con una mujer, es perfectamente posible, pues existen dos mujeres que han sido elegidas concejalas, por tanto, de entre ellas, se debió nombrar a la segunda autoridad de ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo, y con ello proteger, respetar, garantizar, y realizar el derecho a la igualdad material con un enfoque o criterios de equidad y paridad de género.

En el caso concreto, la designación del Vicealcalde o Vicealcaldesa en el Concejo Municipal de Zapotillo, debió realizarse en respeto a lo establecido por la Constitución de la República del

Ecuador, específicamente sobre el derecho y «principio de paridad» y el respeto a lo previamente establecido el artículo 317 del COOTAD. -4- (creador)

Para comprender la importancia de la paridad de género, hemos creído conveniente contextualizarla en torno al derecho a la igualdad material, también conocida como igualdad sustancial. Respecto al derecho a la igualdad, la Constitución de la República del Ecuador, dispone que:

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.

Siendo así que el derecho a la igualdad, tiene tres componentes, la no discriminación, el derecho a la igualdad formal, entendida como la igualdad de todos ante la ley; y, la igualdad material, también entendida como igualdad sustancial. Sobre esta última, la Corte Constitucional ha dicho que:

*La Constitución de la República reconoce dos categorías de igualdad: formal y material. La primera de ellas se refiere a la igualdad ante la ley, por medio de la cual se proclama que las normas jurídicas deben ser aplicadas a todas las personas, sin distinción de ninguna clase (Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.º 058-14-SEP-CC, caso N.º 0435-II-ER). Esta categoría se refiere a la igualdad en la aplicación del derecho, lo que, a decir del jurista Robert Alexi, toda norma jurídica sea aplicada a todo caso que cae bajo su supuesto de hecho y a ningún caso que no caiga bajo dicho supuesto, es decir, que las normas jurídicas tienen que ser obedecidas (Alexy, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2ª Edición, Madrid, p. 348). Por su parte, la categoría material implica que una medida, en su afán de buscar un trato igualitario, debería considerar las diferencias existentes en la práctica, que hacen que la situación de cada uno de los titulares del derecho sea particular. En otras palabras, la aplicación de la regla destinada a tratar a todos por igual, causará que uno de los sujetos, en comparación, vea seriamente disminuido el estatus de protección de sus derechos.<sup>3</sup>*

*Por otro lado, la dimensión material de este derecho, parte del reconocimiento de las diferencias existentes respecto a las condiciones materiales para el desarrollo de las personas en cuyo caso, corresponde al*

Estado, desarrollar y adoptar las acciones positivas necesarias que promuevan la equiparación de las situaciones materiales de los individuos o grupos sociales que se encuentren en desventaja frente a quienes tengan mejores condiciones.<sup>4</sup>

Ello quiere decir que existen condiciones materiales que impiden que las personas puedan ejercer en igualdad de condiciones los derechos consagrados, como los derechos políticos en el caso que aquí nos ocupa, y que se encuentran consagrados tanto en la Constitución de la República del Ecuador, artículo 61; y en instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 23, que estipula que:

#### Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. (...). (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969 Art. 23.

Siendo así que resulta necesario que se tomen acciones desde el Estado, para garantizar que las personas podamos gozar en igual medida de los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente; por lo que la paridad de género, constituida en la Constitución de la República del Ecuador, es un derecho y un principio creado por el constituyente con el fin de velar que las personas podamos ejercer los derechos políticos y de participación, en igual medida, superando las barreras materiales y estructurales, como las propias de una sociedad patriarcal.

Por lo que, al no respetar las disposiciones respecto a la paridad establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y el COOTAD, el Concejo Municipal de Zapotillo vulneró el derecho a la seguridad jurídica en cuanto al principio de igualdad con criterios de equidad y paridad de género en la participación política de las personas, lo que lleva a la vulneración del derecho a la igualdad sustancial.

#### 2. Vulneración de la supremacía constitucional e inobservancia de instrumentos internacionales de derechos humanos

El artículo 1 de la Constitución de la República proclama al Ecuador como "(...) un Estado constitucional de derechos y justicia, democrático (...)". Durante el año 2008 el Ecuador, al igual que otros países de la región, atravesó un proceso de rediseño constitucional, lo cual implicó un cambio estructural, en la parte dogmática y orgánica de la «Constitución de Montecristi».<sup>5</sup>

El rediseño constitucional plasmado por la Constitución de Montecristi, supone al Estado como el responsable de la realización de los derechos y transforma a la Constitución, que era entendida como una estructura de protección de la sociedad frente al poder político, a ser

4 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia: N° 122-16-SEP-CC, del 20 de Abril de 2016.

5 El Estado en la Nueva Constitución, Julio Echeverría, en La Nueva Constitución del Ecuador Estado, derechos e instituciones, ed. Santiago Andrade, Agustín Grijalva, Claudia Storini, (Quito: Corporación Editora Nacional, 2009), 11.

ahora un instrumento del poder político para la realización de los derechos.<sup>6</sup>

Siendo así que la ley y las actuaciones del poder público se encuentran sometidas a una relación de adecuación y de subordinación, a un estrato más alto de derecho que es el establecido en la Constitución<sup>7</sup> y en las obligaciones internacionales contraídas por el Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos. Al respecto, la Constitución indica que:

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los Contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.

Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución.

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución aunque las partes no las invoquen expresamente.

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos.

Art. 427.- Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional.

De la lectura de los artículos constitucionales citados se puede evidenciar claramente que al ser la Constitución de la República la norma jurídica suprema, todas las normas y actos del poder público deben mantener conformidad con ella; y expresamente todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la misma. De igual manera, cabe destacar que la interpretación de las normas constitucionales se realizará por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. Por lo que la designación de Vicealcalde o Vicealcaldesa del Concejo Municipal de Zapotillo debió realizarse en estricto respeto del derecho a la paridad de género establecido en la Constitución de la República del Ecuador y sobre el cual nos referimos en el punto 1 de esta demanda, siendo así que, la designación del señor Ing. Juan Leonel Correa Requena, como Vicealcalde de Zapotillo, vulnera los derechos arriba referidos.

Pero además de ello, la designación efectuada va en contra de lo establecido en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la cual fue ratificada por el Estado ecuatoriano en 1981, y con la cual el Ecuador se obligó, entre otros, a;

6 El Estado en la Nueva Constitución, Julio Echeverría, en La Nueva Constitución del Ecuador Estado, derechos e instituciones, ed. Santiago Andrade, Agustín Grijalva, Claudia Storini. (Quito: Corporación Editora Nacional, 2009), 14.

7 Gustavo Zagrebelsky, "El Derecho dúctil", (Madrid: Trotta, 1997), 34.

Art. 7.- Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

- a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
- b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;
- c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

Respecto al artículo que antecede, la Recomendación General Nº 23 "Vida Política y Pública" adoptada en el 16º Periodo de Sesiones, el 03 de enero de 1997, ha indicado que:

41. Los Estados Partes deben garantizar que sus constituciones y su legislación se ajusten a los principios de la Convención, en particular, a los artículos 7 y 8.

43. Los Estados Partes deben idear y ejecutar medidas temporales especiales para garantizar la igualdad de representación de las mujeres en todas las esferas que abarcan los artículos 7 y 8.

45. Las medidas que hay que idear, ejecutar y supervisar para lograr la eficacia incluyen, en virtud del párrafo a) del artículo 7, las que tienen por objeto:

a) Lograr un equilibrio entre mujeres y hombres que ocupen cargos de elección pública (...)

46. Las medidas en virtud del párrafo b) del artículo 7 incluyen las que están destinadas a asegurar:

(...) b) Su goce efectivo de la igualdad de derechos a ocupar cargos públicos;

47. Las medidas en virtud del párrafo c) del artículo 7, incluyen las que están destinadas a:

a) Asegurar la promulgación de una legislación eficaz que prohíba la discriminación de las mujeres (...)

De la misma manera, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en las Observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados del Ecuador, indicó que:

24. El Comité encomia al Estado parte por haber adoptado un sistema de paridad entre los géneros y alternabilidad de candidatos y candidatas en las listas electorales para elecciones pluripersonales. Sin embargo, observa con preocupación que la representación de la mujer en las elecciones unipersonales y en los órganos políticos locales sigue siendo limitada, especialmente en el caso de las mujeres indígenas y afroecuatorianas.<sup>8</sup>

8 [http://doctstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6Q&G1d%2EPPRiCAqhKb7yhssmw5jHDQ2uNBd%2BFWAIG8TII%2Bppsl\\_dXJkL6EnJXOEZSiXcINzzs9WIWVFAUAdZczlzb6cAlThgr%2F7tBysZuSLsC0AaYhIdmDmD2Xey5sb%2BKwHmOaJ7%2FLdSLeD711hifw%3D%3D](http://doctstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6Q&G1d%2EPPRiCAqhKb7yhssmw5jHDQ2uNBd%2BFWAIG8TII%2Bppsl_dXJkL6EnJXOEZSiXcINzzs9WIWVFAUAdZczlzb6cAlThgr%2F7tBysZuSLsC0AaYhIdmDmD2Xey5sb%2BKwHmOaJ7%2FLdSLeD711hifw%3D%3D)

- 25. El Comité recomienda que el Estado parte:
  - a) Adopte medidas para aumentar la participación de la mujer en elecciones unipersonales y en órganos políticos, especialmente a nivel local (...)?

Siendo así que la designación de un Vicealcalde hombre, va en contra de las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano en la materia, vulnerando así los derechos aquí mencionados.

**V. RELEVANCIA SOCIAL Y CASOS ANÁLOGOS**

Además de lo anteriormente mencionado, la Defensoría del Pueblo del Ecuador considera oportuno exponer porque considera este un caso de relevancia social.

Señora Jueza o señor Juez Constitucional de Derechos, las mujeres han sido históricamente discriminadas de la vida política y pública y se le han asignado por costumbre asuntos domésticos y posteriormente cuestiones de la vida pública de menor trascendencia.

Circunstancias que han llevado a la mujer a luchar por la reivindicación de su derecho a la igualdad en todos los ámbitos. Para lograr aquello ha sido necesario que los Estados se obliguen a la realización de acciones afirmativas mínimas que busquen la igualdad. Acciones que han partido con la adopción de legislación que equipare estas desigualdades.

Pero estas acciones mínimas, a las que se han obligado los Estados, son el punto de partida, el inicio para alcanzar siglos de desigualdad y por ningún motivo pueden ser consideradas como suficientes o el límite máximo para realizar el derecho a la igualdad material de las mujeres en el ámbito político y público. Mucho menos aún cuando se trata de desconocerlas o ignorarlas.

Como vemos, el Ecuador en lo que respecta a la igualdad formal, ha tomado medidas necesarias, apropiadas y adecuadas para cumplir con los derechos previstos en la Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), así como la Recomendación General N° 23, Vida Política y Pública, en el 16º Periodo De Sesiones; ya que ha incluido en su normativa la paridad de género. Pero es necesario tener en cuenta que la igualdad formal, sola se cristaliza y se hace efectiva, palpable y real, cuando esta se ejecuta.

Para lograrlo, no basta con que este positivizada, es necesario que se busquen y tomen todas las medidas y actuaciones adecuadas para que se materialice, pues solamente ahí se cumple el derecho constitucional de igualdad formal, material y no discriminación de las mujeres en la vida política y pública.

El Estado Constitucional de Derechos y Justicia ecuatoriano, no es ajeno al reconocimiento de estos derechos. Tenemos en el país dos precedentes en los que la justicia ha permitido la realización de los derechos aquí expuestos.

Me refiero al Proceso Nro. 01204201904170, en el cual el Dr. Luis Alberto Guerrero, Juez de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Cuenca, declaró la vulneración del derecho constitucional a la igualdad material en correlación con el derecho de participación y ocupación de la función pública aplicando criterios de paridad en la elección de la segunda

---

9  
<http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6Q&GId%2FPPRGcAqhKb7yhs5mw5jHDQuNBd%2BTWAIG8TIE%2BppolLdXJkL6FnjXOEZSjXcTNz99WlWVfAUAdZczlzb6eAlThgu%2F7bBissZuSLxCoAIVrldnDmD2Xey5xb%2BKwHmOaj7%2FLdSLcD71Hilw%3D%3D>

-6- (con sello) 8  
autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado municipal de Cuenca; así como al Proceso Nro. 11333-2019-00216, en el cual la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Loja, declaró la vulneración del derecho a la seguridad jurídica en cuanto regula el principio de igualdad con criterios de equidad y paridad de género en la participación política de las personas, así como las garantías normativas contenidas en el Art. 84 de la Constitución de la República que de manera imperativa establece que en ningún caso los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la constitución.

## VI. IDENTIFICACIÓN DE LA PRETENSIÓN

Con las consideraciones, expuestas proponemos la presente Acción de Protección conforme a lo establecido en el art. 88 de la Constitución de la República y los art. 39 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para que en sentencia declare:

1. La vulneración del derecho a la seguridad jurídica en cuanto al principio de igualdad con criterios de equidad y paridad de género en la participación política de las personas; y, la vulneración de la supremacía constitucional e inobservancia de instrumentos internacionales de derechos humanos, que trae como consecuencia la vulneración del derecho de la igualdad material en correlación con el derecho de participación y ocupación de la función pública aplicando criterios de equidad y paridad de género de: Sra. Idelsa Tatiana Barba Medina y Verónica Lucía Miño Ortiz, en su calidad de mujeres representantes de la ciudadanía del cantón Zapotillo en la vida política y pública, a desempeñar la función pública de Vicealcaldesa, función que les permite compartir el poder y la toma de decisiones con el Ing. Oliver Efrén Vidal Sarango, -hombre- que fue elegido para representar a la ciudadanía como Alcalde de ese cantón.

Solicito además que como reparación integral, disponga:

1. Dejar sin efecto la elección dada para la elección para la vicedalcaldía del Concejo Municipal de Zapotillo en sesión del 15 de mayo de 2019 a partir de las 16h00,
2. Que en forma inmediata, el Concejo Municipal de Zapotillo, convoque a sesión para elegir a la segunda autoridad del ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo, es decir, su Vicealcaldesa, conforme lo dispuesto en la Constitución de la República y el COOTAD.
3. Que la sentencia emitida, sea publicada en los medios de comunicación del cantón Puyango y/o en un diario de circulación provincial, así como en la página web institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo durante el periodo 2019-2023, a fin de que las mujeres conozcan y se empoderen respecto de los criterios de equidad y paridad de género que les asisten.

Que en sentencia se disponga que el Municipio del cantón Zapotillo a través de sus representantes legales ofrezcan disculpas públicas a la señoras concejalas Idelsa Tatiana Barba Medina y Verónica Lucía Miño Ortiz, en un acto público y en días y horas laborables que se planificará para el efecto.

5. Que se ordene al Municipio del Cantón Zapotillo realice procesos de capacitación a sus funcionarios y funcionarias en derechos humanos con enfoque de género, para lo cual podrá solicitar el apoyo de la Defensoría del Pueblo del Ecuador.

## VII. DECLARACIÓN

-7- (516) 8

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su Art. 10 numeral 6, declaro que no hemos interpuesto otra acción de misma naturaleza de manera anterior o simultánea.

### VIII. ELEMENTOS PROBATORIOS

A fin de demostrar la vulneración de los derechos antes mencionados, me permito adjuntar, copia simple del ACTA DE LA SESIÓN INAUGURAL DEL CONCEJO CANTONAL DE ZAPOTILLO, DE 15 DE MAYO DE 2019 a las 16h00.

### IX. CITACIONES Y NOTIFICACIONES:

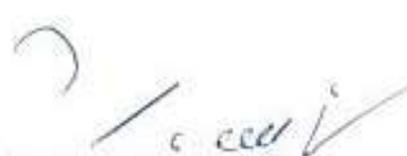
Sírvase citar a las autoridades demandadas en las siguientes direcciones:

- ▲ Al Ing. Oliver Efrén Vidal Sarango, Alcalde del Cantón Zapotillo en su oficina institucional en el edificio del GAD del Cantón Zapotillo, ubicado en la calle 24 de mayo y Capitán Febres Cordero lugar de público conocimiento o mediante correo electrónico: [munzapotillo@gmail.com](mailto:munzapotillo@gmail.com) o [oevidales@gmail.com](mailto:oevidales@gmail.com).
- ▲ Al Abg. Luis Padilla, Procurador Síndico del GAD cantonal de Zapotillo, o quien ocupe su cargo actualmente, en la misma dirección anterior.
- ▲ A los Concejales del cantón Zapotillo: Sr. Diego Enrique Barreto Panamito, Juan Leonel Correa Requena, Sr. Jorge Alberto Rogel Valdiviezo, Idelsa Tatiana Barba Medina; y, Verónica Lucía Miño Ortiz en la misma dirección anterior.
- ▲ Además, por cuanto la presente acción se presenta en contra del Estado, conforme a las normas de la Ley Orgánica de la Procuraría General del Estado, solicito se notifique a la **Procuraduría General del Estado** a través de su Delegada Ana Cristina Vivanco Eguiguren en Loja, a quien se le notificará en sus oficinas ubicadas en la Calle 18 de noviembre entre José Antonio Eguiguren y Colón de la ciudad de Loja.

Las notificaciones que nos corresponden las recibiremos a través de los correos electrónicos institucionales: [raguirre@dpe.gob.ec](mailto:raguirre@dpe.gob.ec) o [atorres@dpe.gob.ec](mailto:atorres@dpe.gob.ec)

Señor Juez, dignese atenderme

Atentamente,

  
Renato Aguirre Valdivieso

  
Adriana Torres Ochoa

**MAT. FORO 11-2001-105**

**Coordinador General Defensorial Zona 7**

  
Poder Judicial de la Federación  
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE HA SIDO PRESENTADA Y REPOSA EN EL PROCESO JUDICIAL.  
Causa No. 113.19-8079 Folios 75 f.  
Zapotilla, a 27 - 09 del 2019.  
Firma:  
Nombre y Apellido: ROBERTO ORTEGA  
Cargo: GESTOR DEL ARCHIVO



Ministerio Defensorial  
del Poder Judicial de la Federación  
RECIBIDO  
Fecha: 07/10/19 Hora: 15:00